



HUMBERTO AGUILAR CORONADO
DIPUTADO FEDERAL ELECTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) DE MÉXICO



POLÍTICA / SOCIEDAD

MÉXICO Y SU DEMOCRACIA

Entre julio de 2018 y junio de 2021, en México vivimos tres años de una gran intensidad política. En este periodo, más de una vez hemos sentido que poníamos en juego el futuro entero de los mexicanos. Unos veían para sus hijos un futuro promisorio, en el que las promesas de siempre por fin se cumplirían y en el que los reclamos seculares eran finalmente atendidos. Otros veían un futuro desolador, un paulatino agotamiento de las clases productivas con menores oportunidades de educación, salud y bienestar.

Tan pronto como tomó posesión el presidente López Obrador, las visiones encontradas comenzaron la disputa por la suerte de la patria. La lógica política imperante durante las tres últimas décadas, fundada en la premisa de que la competencia electoral fuera feroz pero que, tras la aceptación de los resultados, los intereses en disputa centraran sus esfuerzos en encontrar las coincidencias que pudieran acercarlos para construir acuerdos, fue dinamitada desde el primer día del nuevo Gobierno.

La lógica de presentar dos Méxicos se convirtió en la herramienta de acción política del presidente López Obrador, es decir, la lógica del pasado corrupto y corruptor enfrentada a la del México transformado sin corruptos ni corrupción. Para ello construyó los mensajes centrales de su discurso político basados en una visión maniquea de la realidad, en la cual sus adeptos son el pueblo bueno y sabio y sus contrincentes, todos aquellos que representan para él los males nacionales.

Las acciones más emblemáticas del inicio de la administración lopezobradorista fueron mensajes contundentes de su deseo de fundar una nueva realidad política en la que las mayorías que apoyaban su Gobierno debían imponerse sobre las minorías derrotadas en la elección del 18. Las decisiones de cancelar el proyecto aeroportuario y la de no usar –y vender– el avión presidencial deben ser entendidas como el fundamento de la comunicación política del Gobierno federal, que intentaba presentar símbolos claros de la lucha emprendida contra los privilegios.

Para construir esa narrativa, era indispensable que todos aquellos que pudieran ser vistos como privilegiados fueran colocados en el lado oscuro de la historia. Con la misma lógica inició la lucha para debilitar a todas aquellas instituciones que pudieran suponer una defensa de los privilegios o un obstáculo a su proyecto. Ahí están todos los organismos que contaban con facultades constitucionales o legales para frenar la voluntad del presidente.

Ya sea por fobias producidas a lo largo de la historia del movimiento del presidente, por razones estrictamente estratégicas o por confrontaciones directas con él, desde el Ejecutivo federal se intentó debilitar la autonomía de esos órganos con reducciones presupuestales, designaciones de personajes afines al Gobierno o con amenazas suficientemente creíbles para provocar renunciaciones.



La sociedad mexicana dejó en claro que está dispuesta a cuidar y defender la vida democrática de México. Los altos niveles de aprobación del presidente de la República no fueron una razón suficiente para convencer a los mexicanos de suspender la normalidad democrática



Adicional a esto, desde el poder se construyó un patíbulo mediático para desacreditar y amenazar, sin pudor ni rubor alguno, a cualquier agente social o político que intentara oponerse a sus decisiones. Todas las mañanas somos testigos de ataques a la prensa, a organizaciones de la sociedad civil o a políticos opositores, así como el uso nunca visto de la Unidad de Inteligencia Financiera con fines de persecución política.

Este escenario provocó la natural reacción que avivó la polarización de la vida social y política de México. Muy pronto se escucharon a los analistas políticos y a los periodistas especializados hablar de indicios de regímenes populistas y autoritarios en las formas de gobernar y en las decisiones de gobierno. Muy pronto observamos a la sociedad civil organizándose para encontrar la forma de solucionar los problemas que generaban las decisiones del Gobierno y las luchas jurídicas en instancias jurisdiccionales.

Así, el presidente no logra imponer su voluntad a pesar de los muchos enfrentamientos que esa relación ha mostrado. Al acercarse la elección de 2021, el objetivo parecía ser el debilitamiento de la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral. En ese campo de batalla, el reciente proceso deja sus mejores lecciones.

La sociedad mexicana dejó en claro que está dispuesta a cuidar y defender la vida democrática de México. Los altos niveles de aprobación del presidente de la República no fueron una razón suficiente para convencer a los mexicanos de suspender la normalidad democrática.



Al contrario, como cada tres años nuevamente los ciudadanos aceptaron participar en el proceso como funcionarios de casilla regalando un día –largo, demandante y extenuante– a la democracia mexicana. Nuevamente los ciudadanos decidieron participar en el proceso y están conformes con los resultados que decretó la autoridad electoral.

En todo el país, las redes sociales se inundaron de mensajes y fotografías de personas orgullosas de haber desempeñado un cargo en las casillas o de haber cumplido el deber de votar. En todo el país las redes sociales se inundaron de imágenes de candidatos triunfadores y orgullosos de la autoridad electoral, que terminó con altos niveles de legitimidad.

La democracia funcionó con toda normalidad y esto, por sí mismo, es un daño relevante para la estrategia del presidente, quién debe entender que gobierna a un pueblo que no está dispuesto a ceder el preciado bien político de vivir en democracia.